

43ª REUNION — 31ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 3 DE 1958

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Enrique Mario Zanni,
Jorge Raúl Decavi y Oscar López Serrot

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ABAROA, Rufino Vicente
ALZABÉ, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio
ARAMBURÚ, Julio P.
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BARRIO, Luis
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Carlos Alberto
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRO, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BENEVENTANO, Domingo
BERTONE, Marcos R.
BLANCO, Rubén Víctor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALÍA, Salvador
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULIT GOÑI, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPA, Sebastián Oreste
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASAS, José B.
CASELLA PINERO, Juan M.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTTE (h.), Adolfo
CONTIN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTÉS, Ezequiel
CUARETTA, César Ramón
CUEVAZ, Agustín
CHAUVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DESPOUY, Pablo Pedro
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ERREA, Daniel

ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio
FAYA, Luis
FEIGUIN de FERRARI, Berta
FERNANDEZ, José Manuel
FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FUERTES, A. Ricardo
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Ernesto
GARCÍA FLORES, José I.
GARCÍA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GILL, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIERREZ, José María
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
GYSSELS, Néstor Juan
HEREDIA, Bernardo M.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUAREZ PENALVA, Miguel Ángel
JUNÍN, Simón
JURL, Jorge
KRONHAUS, Arnoldo
LAFUENTE, Ambrosio César
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LICEAGA, María Teresa M. de
LISCHETTI, Carlos A. M.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUELMO, Horacio Flavio
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANTECÓN, Esteban
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis

MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.
MONJARDÍN, Federico F.
MORENO, Eufemio Tecla
MOSCA, Gabriel Carlos J.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.
PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMAUX, Misael J.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PENNACCHI, Alfredo Arquimedes D.
PERALTA, Domingo Orlando A.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTO, Luis María
POITEVIN, E. Emilio
POLOGNA, Aurelio José
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
RECIO, José A.
RIVERO, Jorge I.
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín
RODRÍGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nírido E.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Ángel
SCHWEIZER, Bernardo
SEGOVIA, Carlos A.
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIRENA, Antonio C. P.
SOLANAS, Juan Carlos
SPANGENBERG, Enrique
STORANI, Conrado Hugo
SUAREZ, Faundo Roberto
SUJEROS, Pedro Ignacio P.
TARULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TESSIO, Aldo E.

TORTONESE, Dante Oscar
 TORTORA, Antonio
 TROILO, Eleogardo B.
 URCELAY, Rafael Cándido
 UZAL, Francisco Hipólito
 VALLE, Salvador
 VECCHIETTI, Augusto Néstor
 VERDAGUER, Armando Miguel
 VILLAR, Alfredo
 VINCIGUERRA, Rómulo
 ZANNI, Enrique Mario
 ZARRIELLO, Raúl Jorge
 ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALDERETE, Elio
 BERNASCONI, Mario
 BONIFACIO, Juan José
 LAFUENTE, Augusto Antonio
 LICEAGA, José V.
 PITTALUGA, José Saturnino
 PURICELLI, Valdemar
 RAVETTI, Francisco Antonio
 RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
 RUIZ, Lucio Carlos
 TONELLI, Haroldo Juan

AUSENTES, CON AVISO:

GIANSEIRA, Marino Alejandro
 GONZALEZ, Ricardo A.
 SANTONI, Nabucodonosor
 SOLARI, Juan Alberto

AUSENTES, SIN AVISO:

BUSTOS, Jerónimo L.
 CARDENAS, Juan Carlos
 MÁS, Juan Antonio
 MONTE, Ricardo Alvaro

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 3184.)
- 2.—Cuestión de privilegio promovida por el señor diputado Becerra (O. A.) con motivo de publicaciones periodísticas. (Página 3184.)
- 3.—Versiones taquigráficas. (Página 3186.)
- 4.—Trámite de asuntos entrados. (Página 3187.)
- 5.—Licencias para faltar a sesiones. (Página 3189.)
- 6.—Homenaje a la memoria de Juan Bautista Alberdi. (Página 3190.)
- 7.—Moción del señor diputado Rodríguez Araya, de preferencia para el pedido de informes sobre importaciones, en infracción aduanera y cambiaria, realizadas por funcionarios diplomáticos y miembros de misiones militares. (Página 3195.)
- 8.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara. (Página 3196.)
- 9.—Moción del señor diputado Belnicoff: trámite del proyecto de ley de municipalización del Frigorífico Lisandro de la Torre y del Mercado de Hacienda de Liniers. (Página 3196.)
- 10.—Indicación del señor diputado Becerra (C. A.) de pronto despacho del proyecto de ley por el que se deroga el artículo 28 del decreto 6.403, sobre enseñanza libre. (Página 3198.)
- 11.—Consideración del despacho de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre estatuto del personal docente. (Página 3200.)
- 12.—Apéndice.

I.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: remuneraciones al personal de la Policía Federal y de la Dirección Nacional de Institutos Penales, y servicios auxiliares. (Página 3275.)
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 1958/59. (Página 3276.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: aporte del Tesoro nacional para cubrir el déficit financiero de empresas del Estado en el ejercicio 1958/59. (Página 3315.)

- IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que remite informes relativos a la construcción de un edificio para el colegio nacional de Formosa. (Página 3317.)
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: presupuestos del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre y Mercado Nacional de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. (Página 3318.)
- VI.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 3318.)
- VII.—Comunicaciones oficiales. (Página 3319.)
- VIII.—Comunicaciones de comisión. (Página 3320.)
- IX.—Despachos de comisión. (Página 3320.)
- X.—Peticiónes particulares. (Página 3321.)
- XI.—Integración de comisión. (Página 3322.)
- XII.—Proyecto de ley del señor diputado Perette y otros: derogación de la ley 14.455, de asociaciones profesionales, y designación de una comisión especial encargada de proyectar el ordenamiento de lo relativo a organizaciones sindicales. (Página 3322.)
- XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Sa-yago Valdez: pensión a las señoritas María Luisa Encarnación y Susana María Pardo. (Página 3322.)
- XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Llugdar: pensión a la señora María Inés Arredondo de Rentería Beltrán e hijos menores María Inés, Marta Hortensia y Mario Claudio. (Página 3322.)
- XV.—Proyecto de ley del señor diputado Segovia: modificación de la ley 9.688, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Página 3323.)
- XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Escalada, por el que se deja en suspenso la aplicación de disposiciones de decretos leyes sobre designación de empleados en la administración pública. (Página 3324.)
- XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Fre-ga, referente a la presencia y firma de testigos instrumentales en los actos y

LXXXVIII.—Proyecto de declaración del señor diputado **Perette** y otros: adopción de medidas tendientes a la mejora y normalización de los medios de difusión por radio y televisión. (Página 3369.)

LXXXIX.—Proyecto de resolución del señor diputado **Belnicoff** y otros, por el que la Honorable Cámara solicita del Poder Ejecutivo informes sobre la reglamentación de la ley 14.394 en lo relativo al bien de familia. (Página 3370.)

XC.—Proyecto de resolución del señor diputado **Beneventano**: creación de una sucursal o agencia del Banco Industrial en Reconquista (Santa Fe). (Página 3370.)

XCI.—Proyecto de declaración de los señores diputados **Tarulli** y **Caggiano**: otorgamiento de créditos a los médicos para la adquisición de vehículos automotores de fabricación nacional. (Página 3371.)

XCII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Domingorena** y otros: designación de una comisión investigadora de la seriedad de las firmas que anuncian el sorteo de lotes de terreno mediante espacios radiales. (Página 3371.)

XCIII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Heredia (B. M.)**: prohibición del ingreso al Norte del paralelo 42º, de ropa y artículos de lencería confeccionados con telas importadas en uso de franquicias de importación. (Página 3371.)

XCIV.—Proyecto de declaración del señor diputado **Heredia (B. M.)**: destrucción o exportación de mercaderías textiles provenientes de comisos aduaneros originados en contrabando. (Página 3372.)

XCV.—Proyecto de declaración del señor diputado **Ferreira (J. W.)** y otros: pavimentación del tramo de camino desde Gualeguay a Puerto Ruiz (Entre Ríos), de la ruta nacional 136, en Entre Ríos. (Página 3372.)

XCVI.—Proyecto de declaración del señor diputado **Belnicoff**: reincorporación de profesionales del arte de curar que debieron renunciar a cargos por aplicación del decreto 13.243/55. (Página 3373.)

XCVII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Belnicoff** y otros, por el que se solicita del Poder Ejecutivo informes sobre la clausura del Instituto Nacional de Sordomudos y traslado de su personal. (Página 3373.)

II.—Planilla de asistencia a las comisiones internas. (Página 3373.)

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de septiembre de 1958, a la hora 18 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. López (J. C. G.). — ¿Hay número en la casa?

Sr. Presidente (Monjardín). — Sí, señor diputado; hay 126 señores diputados.

Sr. López (J. C. G.). — Entonces, hago indicación de que se continúe llamando otra media hora, a fin de obtener quórum en el recinto.

Sr. Giordano Echegoyen. — El bloque de la minoría está de acuerdo en que se siga llamando.

Sr. Presidente (Monjardín). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se continuará llamando.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

—A la hora 19:

Sr. Presidente (Decavi). — Queda abierta la sesión con la presencia de 101 señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Becerra (O. A.). — He pedido la palabra, señor presidente, para plantear una cuestión de privilegio.

Dentro de tres días se cumple el 29º aniversario de la revolución del 6 de septiembre. Aludo a esta circunstancia, señor presidente, por motivos muy distintos a los que pueden inspirar el propósito de rendir un homenaje.

Aquella fecha aciaga no es para los argentinos una fecha arqueológica, sino que, por muchos motivos, es hoy una fecha militante.

La cuestión de privilegio que voy a plantear está determinada por la aclaración publicada en dos importantes diarios de esta Capital por cinco personas que están familiarmente entroncadas con un apellido políticamente supérstite y que hace veintinueve años formó parte del sistema nervioso de todos los radicales oprimidos por la tiranía de Uriburu.

Poseo un archivo político de relativa importancia, pero aclaro bajo mi palabra de honor que nunca, jamás, he utilizado un documento para obtener un éxito polémico circunstancial o para manchar una reputación. Esta es una lección que he aprendido del general Mitre.

Cuando envié una carta al director del diario «La Nación», dando los fundamentos en que

Art. 2º—El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará al artículo 3º de la ley 13.478.

Art. 3º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Elías N. Llugdar.

Señor presidente:

El doctor Mario Rentería Beltrán falleció en esta capital el 19 de junio de 1945, en ejercicio de la docencia y después de haber prestado más de 20 años de servicios a la Nación. Un acto de verdadera justicia anima el presente proyecto, que viene a reparar una situación afligente de sus deudos, motivada por imprevisión de la ley de jubilaciones civiles, en vigencia en el año del fallecimiento del causante; y que el legislador se ve en el deber de contemplar, en casos especiales, a fin de que el Estado recurra con su ayuda pecuniaria y contribuya así a hacer desaparecer el desasosiego y preocupación en hogares acreedores a estos beneficios; el doctor Rentería Beltrán, abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, fue un estudioso que se distinguió en el foro, en la cátedra y en el periodismo de nuestro país.

Sus servicios a la Nación se inician como empleado de la excelentísima Cámara Civil Segunda de Apelaciones de la Capital Federal y posteriormente, una vez graduado doctor en jurisprudencia, a los 21 años de edad, se desempeñó como subsecretario de la intervención nacional de Mendoza, a cargo del doctor Tomás de Veyga; cumplida esa misión fue juez de primera instancia en lo criminal y correccional en su provincia natal, Santiago del Estero, cargo que ejerció con ecuanimidad y ponderación de juicio.

Una vez trasladado a la Capital Federal fue abogado de los Ferrocarriles del Estado, profesor de derecho constitucional y de filosofía e historia en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento y Liceo Nacional Nº 2, y presidente del Consejo Escolar del distrito XIX, de esta ciudad.

Ahora bien, su esposa viuda recurrió a la Caja Nacional de Jubilaciones Civiles por la pensión a que se creía con derecho, documentando 25 años de servicios prestados al país, en el expediente que obra en el Instituto Nacional de Previsión Social, siéndole denegada en virtud de disposiciones anacrónicas de la ley en vigencia, que con la normalización del funcionamiento del sistema legal, al constituirse el actual gobierno constitucional en 1946, le hubiere correspondido la pensión cuyo monto se asigna en el articulado del presente proyecto.

La precaria situación económica de su familia, carente en absoluto de recursos, la necesidad de educación y subsistencia de los menores, el aumento del costo de la vida, justifican y hacen viable la sanción del presente proyecto, para lo cual solicito el voto favorable de mis honorables colegas.

Elías N. Llugdar.

—A la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

XV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Modifícase la ley 9.688, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de la siguiente manera:

a) Substitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Para el monto de la indemnización si el accidente fuera mortal, el empleador sufragará los gastos de entierro y traslado e indemnizará a los derechohabientes con una suma igual al salario total de los últimos mil días de trabajo. Dicha indemnización no será inferior a \$ 60.000.

- b) Substitúyese en el artículo 9º el párrafo: «invirtiendo el importe de dichas indemnizaciones en títulos de créditos de la Nación, entregando mensualmente a los interesados las rentas que a ellos les correspondan», por «la que procederá a entregar el monto de la indemnización a quien corresponda».
- c) Modifícase en el artículo 10, apartado 2º, el término de «un mes», por «seis meses salvo caso de fuerza mayor».
- d) Modifícase el artículo 22, en su apartado 1º, inciso a), en la siguiente forma:

Cuando un obrero se incapacite en su trabajo en forma temporaria, permanente, o falleciere a causa de enfermedad que resulte del efecto exclusivo de la clase de trabajo en que se halla habitualmente ocupado durante el año que precede a la inhabilitación, tendrá derecho a la indemnización legal siempre que:

- 1º La enfermedad o síndrome sea debida a la acción de un elemento extraño al obrero, actitud o esfuerzo sin intervenir en su producción, hábitos o alteraciones constitucionales.
- 2º Que dicho síndrome se presenta con idéntico carácter en todos los obreros que trabajen u operen en la misma forma o condición.

e) Agregar como artículo 22 bis el siguiente:

- a) Toda enfermedad profesional, aguda o crónica, deberá ser denunciada obligatoriamente ante autoridad competente, y en todos los casos el patrono, sin perjuicio de la indemnización, estará obligado a prestar la atención medicofarmacéutica ortopédica, no pudiendo despedir al personal afectado, excepto por incapacidad total y permanente, pasados los dos años, debiendo en dicho caso el Estado suministrarles los medios para la rehabilitación y reconstrucción.

Carlos A. Segovia.

Señor presidente:

Conforme a estadísticas, si bien es cierto que el número de enfermos que sobreviven es mayor que hace cincuenta años y se disfruta de un promedio de vida más largo, alcanzando hoy término medio entre 65 y 70 años, no es menos real que el número de incapacitados crece en forma alarmante, al punto de sostenerse que los accidentes ocupan el primer lugar en las tablas nosológicas.

Como bien lo afirma un autor, en nuestro país se considera que existen más de un millón y medio de

personas con alguna inhabilitación y la mortalidad por accidente se calcula entre 40 y 45 por cien mil.

Los accidentes, continúa, provocan más del 10 % de las muertes anuales y de ellos, 8.000 se producen fuera de los medios laborales. Los heridos suman más del millón y los inválidos se consideran en más de 400.000 anuales.

Luego, el problema del siniestrado debe ser contemplado en forma integral, ya que no debe olvidarse que nuestra ley 9.688 de accidentes de trabajo es del 11 de octubre de 1915 y, aunque modificada posteriormente por otras leyes y decretos, debe ser revista en todo o en sus partes y contemplada a la luz de los dictados de la medicina preventiva.

La ley establece la responsabilidad del patrono o empleador en los casos de accidente de sus obreros o empleados durante la prestación de servicios. Igualmente se les responsabiliza cuando dicho infortunio ocurre en el trayecto, entre el lugar del trabajo y el domicilio, quedando el patrono exento de responsabilidad cuando el infortunio se produce por causa ajena al trabajo, sea consecuencia de la intención de la víctima o provenga de la culpa grave de ésta.

Cuando se reconoce la culpabilidad del patrono, conforme al decreto del año 1955 (modificación del artículo 8º), se tiene en cuenta lo siguiente: si el accidente es mortal, el patrono sufragará los gastos de entierro hasta \$ 800, e indemnizará a los derechohabientes con una suma igual al salario total de los últimos 1.000 días de trabajo. La indemnización nunca será superior a \$ 30.000.

Bien es cierto que el decreto reglamentario puede modificar el monto para gastos de entierro y el tope de indemnización, atendiendo a las fluctuaciones de los salarios, la verdad es que la cifra de \$ 30.000 es exigua, razón por la cual estimo necesario, en caso de muerte por accidente de trabajo, se abone \$ 60.000, más los gastos de sepelio y traslado al lugar donde residen los deudos del siniestrado, en caso de habitar éste en medios rurales.

Creemos asimismo oportuno modificar el artículo 9º a objeto de que el importe de las indemnizaciones se entregue a quien corresponda.

El apartado 2º del artículo 10, que establece que los fondos de la Caja de Garantía deben ser destinados a pagar las indemnizaciones que dejaren de abonarse por insolvencia absoluta de los patronos judicialmente declarada, y siempre que la víctima hubiese iniciado su acción un mes después del accidente, debe ser modificado substituyendo el término «un mes, por «seis meses».

En cuanto al artículo 22, la modificación propuesta no tiene otro fin que el de diferenciar las enfermedades del trabajo de las profesionales, a fin de evitar los inconvenientes que la falta de su establecimiento por la ley establece cuando ello se deja librado a la interpretación de médicos y juristas.

Finalmente, creemos que el hombre siniestrado debe ser recapacitado, recuperado y reconstruido por el Estado, quien creará los organismos necesarios que permitan tal restitución para que el hombre se rehabilite y participe siempre como ente útil de los beneficios que le brinda la sociedad.

Carlos A. Segovia.

—A la Comisión de Legislación del Trabajo.

XVI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Déjese en suspenso la aplicación del artículo 3º del decreto ley 6.666/57 y los artículos 2º, 3º 13 y 30 del decreto ley 1.188/58, hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe y reglamente el escalafón único para el personal civil de la Nación, manteniéndose la situación adquirida por el personal en virtud del mismo.

Art. 2º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alfredo H. Escalada.

Señor presidente:

Que las prescripciones contenidas en el decreto ley 6.666/57 y decreto ley 1.188/58, no obstante sus caracteres formales de decretos leyes, son de substancia no legislativa sino reglamentarias en consecuencia sujetas a normas administrativas.

Que lo dispuesto en las mismas significa una intromisión en las facultades privativas de nombramiento del personal administrativo que la Constitución Nacional artículo 86, inciso 1º y 10 reserva al Poder Ejecutivo en su carácter de jefe supremo de la administración, facultades que no sólo abarcan el acto de designación sino, asimismo, la determinación de sus modalidades.

Cabe destacar que estas atribuciones exclusivas no han sufrido merma alguna por la reforma constitucional de 1957, ya que las normas agregadas a continuación del artículo 14, en lo referente a la estabilidad del empleado público, sólo se aplica al personal en funciones, careciendo de toda relación con la materia de nombramientos y en lo tocante al requisito de condiciones dignas y equitativas de labor. Se trataría pues, de potestades privativas del Poder Ejecutivo.

Que es propósito fundamental de este gobierno asegurar la estabilidad de todos los empleados administrativos, no habiéndose producido hasta la fecha ningún acto que contraría esta afirmación.

Que la modificación que se propone del decreto ley 6.666/57 y decreto ley 1.188/58, no significa modificar la situación del personal, adquirida en virtud del mismo, pero que el mantenimiento de la política que señalamos, no significa en manera alguna que el Poder Ejecutivo en uso de facultades que le son privativas, no pueda designar en los cargos que crea conveniente, a aquellas personas que por razones de su conocimiento y de su identificación con las normas que orientan la acción del gobierno, sean necesarias para la mejor marcha de la administración.

Que por todas estas consideraciones consideramos necesario la suspensión que propiciamos a los efectos del mejor ordenamiento administrativo.

Alfredo H. Escalada.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XVII

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Las escrituras públicas y demás actos o contratos de intervención notarial no requerirán la presencia y firma de testigos instrumentales.